El mayor rescate de la historia

JOAQUÍN ESTEFANÍA

Como en un bucle fatal, el re-corrido de la democracia está representada en un pequeño país como Grecia. Allí tuvo su origen la democracia y en ese mismo lugar descubrimos ahora el sueño sobre el que se montaba ese sistema político: que éramos dueños de nuestro propio destino. Lo cuenta, pesimista, Fernando Vallespin en su último libro (La mentira os hará libres, Galaxia Gutenberg); los políticos ya no representan a los ciudadanos y se limitan a administrar los imperativos, casi siempre técnicos, de un sistema económico sobre el que han perdido la capacidad de iniciativa.

Además de la descomposición social motivada por unas dosis inhumanas de austeridad, Grecia —como otros países europeos— tiene que hacer frente también a los problemas de liquidez y solvencia de sus bancos, que es como decir de los ahorros de los ciudadanos. Muchas veces en la historia ha habido rescates financieros, pero nunca tan amargas ayudas equivalen el 8,2% del PIB español. Alguien, que sería inmediatamente acusado de ligereza, podría decir que en España no habría un problema de déficit público si no hubiese habido tantas multas en la banca. La CNC aporta estos datos en su informe anual y también la teoría correspondiente: “La concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención de las Administraciones y el sector público en la economía que, sin perjuicio de la persecución de ciertos objetivos de interés público, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introduciendo distorsiones e inequidades y perjudicar la libre competencia”. Así que no solo tiene problemas la democracia sino también la economía de mercado.

Entre esas distorsiones e inequidades pueden estar las inyecciones de líquidez del Banco Central Europeo (BCE) a la banca. Cuenta Stiglitz (El precio de la desigualdad, Taurus) la siguiente fábula: si un banco puede pedir dinero pres-

El Supremo ratifica el decreto contra el fraude en notarías

La OCU denunció a la fiscalía un engaño de 93 millones en 2010

MANUEL ALTOZANO Motril

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la normativa aprobada por el Gobierno socialista contra el fraude de notarios y registradores de la propiedad en la cancelación de hipotecas. El alto tribunal ha quitado la razón al Consejo General del Notariado, que lo recurrió, y ha bendecido el decreto del último ministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño, por el que se limitaba el arancel al poner fin al préstamo a los 55 euros en el caso de los notarios y a los 24 en el de los registradores. Hasta su aprobación, algunos de estos funcionarios inflaban las matrices con conceptos que, según la nueva normativa, no se pueden incluir. En septiembre de 2011 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció en fiscalía que el fraude, solo en 2010, pudo alcanzar los 93 millones de euros.

Esas tarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó una rebaja del arancel por las cancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a varios perjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios, que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negaron a aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas.

La norma impide cobrar por otros conceptos que inflaban la factura

A pesar de que la exposición de motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación de hipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender la rebaja en el arancel "a las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos hipotecarios", es decir, a las que se realizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios y registradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casos de subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación de hipoteca, pero no a las cancelaciones finales.

El decreto ratificado ahora por el Supremo busca acabar también con determinados conceptos por los que estos funcionarios cobraban sin respaldo legal. Las mínimas de los notarios, por ejemplo, no podrán incluir gastos como la información registral (24 euros), fax de comunicación al registro (30 euros), certificado de cargas (24 euros), diligencia de catastro (18 euros), obtención de certificaciones bancarias (60 euros) o búsqueda de antecedentes (60 euros) y da igual que sean en papel o telemáticamente.

La norma del Gobierno, "esta en consonancia con lo pretendido por las sucesivas reformas legislativas relativas al mercado hipotecario, en las que se pretende principalmente una reducción de costes para los pres-tatarios", responde el alto tribunal al Consejo General del Notariado al desestimar su recurso.
Las ayudas a los bancos de la zona equivalen al 12% del PIB europeo

El 94% de los apoyos públicos en España son para la banca

plios como el que se está produciendo ahora en Europa. La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, dependiente del vicepresidente de la misma, el español Joaquín Almunia, es el organismo que ha de autorizar las ayudas de Estado a los bancos y acaba de actualizar sus cifras: desde octubre de 2008, cuando comienza la Gran Recesión tras la quiebra de Lehman Brothers, hasta finales del año 2011 (no se incluye lo acontecido el ejercicio en curso), el total de ayudas autorizadas a la banca asciende a más del 12% del PIB europeo, dividido en dos grandes partidas: recapitalizaciones y compra de activos tóxicos (320.000 millones de euros y 1,1 billones respectivamente), aproximadamente un 3% del PIB europeo; y garantías, avales y liquidez por valor del 9% restante.

Coinciendo con estos datos, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de España ha hecho públicas las ayudas públicas a la banca durante el año 2010, que representan más del 94% del total. Es un fraude que no termina y que no parece tener fin. Las ayudas no se destinan a sanear el sistema financiero, sino a salvar a los bancos que lo están haciendo hasta ahora.

Las ayudas a los bancos no deben ser destinadas a mantenerlos en el mercado, sino a hacerles desaparecer. Es importante que seamos conscientes de que la economía española está en peligro y que es necesario un cambio radical en el sistema bancario.

Enhorabuena!

Damos la bienvenida a los 2.000 asesores financieros asociados a EFPA que han obtenido las certificaciones profesionales EFA y EFP durante 2011 y 2012...

... y también a los miles de clientes que disfrutan del asesoramiento cualificado y transparente de nuestros más de 10.000 asociados profesionales certificados en España.